

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
SALA PLENA

Santiago de Cali, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

AutoInterlocutorio No. _____

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

MEDIO DE CONTROL:	Nulidad y restablecimiento del derecho - Laboral
REFERENCIA:	76001-33-33-016-2017-00085-01
DEMANDANTE:	Rafael Bernardo Loaiza Escobar. Apoderado: Jorge Hernando Cortes Valderrama jorhecor@hotmail.com
DEMANDADO:	Departamento del Valle del Cauca njudiciales@valledelcauca.gov.co
VINCULADO:	Nación – Ministerio de Educación notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co
ASUNTO:	Auto resuelve conflicto de competencia

I.- ASUNTO

Procede la Sala Plena de la Corporación, a decidir sobre el conflicto negativo de competencias suscitado entre el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Cali y el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Guadalajara de Buga, respecto del conocimiento de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Rafael Bernardo Loaiza Escobar contra el Departamento del Valle del Cauca.

II.- ANTECEDENTES

La parte actora a través de apoderado judicial, mediante el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, solicitó¹la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo negativo frente a la no resolución del derecho de petición presentado el 12 de noviembre de 2015 ante el Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Educación.

El proceso inicialmente correspondió por reparto al Juzgado Dieciséis Administrativo de Cali², el cual mediante auto interlocutorio No. 157 de febrero 28 de 2019³, declaró su falta de competencia y ordenó remitirlo a los juzgados administrativos del Circuito de Buga (reparto), sustentando su decisión en que de conformidad con el numeral 3 del artículo 156 del CPACA, la competencia en los asuntos de nulidad y restablecimiento

¹Ver folios 9 a 100 cuaderno 1A

²Ver folio 115 cuaderno 1A

³Ver folio 237 cuaderno 1A



RADICACIÓN : 76001-33-33-016-2017-00085-01
MEDIO DE CONTROL : Nulidad y restablecimiento del derecho - Laboral
DEMANDANTE : Rafael Bernardo Loaiza Escobar
DEMANDADO : Departamento del Valle del Cauca

2

del derecho de carácter laboral, se determina por el último lugar donde se prestaron los servicios.

Señaló que una vez revisada el acta de posesión y los documentos obrantes en el expediente el último lugar donde el demandante prestó sus servicios fue en la Institución Técnico Agrícola ITA de la ciudad de Buga y por tanto consideró que el competente sería el juzgado Administrativo Oral del Circuito de Buga y así lo ordenó.

Posteriormente, y ya sometido a reparto, el asunto correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuitode Buga⁴, instancia judicial que a través del auto interlocutorio No. 234 de junio10 de 2019⁵ resolvió plantear el conflicto de competencias con el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuitode Cali, considerando queal momento de admitir la demandadicho juzgado no hizo pronunciamiento alguno acerca de la competencia por el factor territorial, que ni la parte demandada ni el Ministerio Público presentaron recurso contra el auto admisorio de la demanda por ese aspecto, que la parte demandada en la contestación de la demanda no propuso excepciones previas respecto a la falta de competencia, por lo que se entiende subsanada dicha irregularidad y por tanto ahora es improcedente declarar la falta de competencia por factores distintos al subjetivo y al funcional.

Para el efecto, refirió el pronunciamiento del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia de marzo 3 de 2016,CP. William Hernández Gómez, radicado No. 05001-33-33-027-2014-00355-01 (1997-14), en la que se señaló que no basta que se configure cualquier causal de falta de competencia para que pueda remitirse el proceso en estado posterior a la admisión de la demanda, pue se perdería el efecto útil a otras normas procesales que regulan aspectos como las causales de nulidad, saneamiento del proceso, prorrogabilidad de la competencia y las excepciones previas que puedan proponerse.

Igualmente, refirió que el artículo 16 del CGP estableció las situaciones en que es prorrogable e improrrogable la jurisdicción y la competencia, determinando que los factores subjetivo y funcional serán improrrogables y que solo por factores distintos a estos, la falta de competencia no reclamada en tiempo será prorrogable y el juez deberá seguir conociendo del proceso.

III.- COMPETENCIA

Corresponde a la Sala Plena la función administrativa⁶dedirimir el conflicto de competencias suscitado entre el Juzgado Dieciséis Administrativo de Cali y el Juzgado

⁴Ver folio 240 cuaderno 1A.

⁵Ver folios 242 a 244 cuaderno 1A.

⁶ V. Sentencia C-037 de febrero 5 de 1996, respecto del juicio de constitucionalidad del artículo 41 de la LEAJ: “2. **CONSIDERACIONES DE LA CORTE.** *Los numerales 1o., 2o., 3o., y 4o se ocupan de labores principalmente administrativas que concuerdan con las diferentes atribuciones contempladas en la Carta Política.*”



RADICACIÓN : 76001-33-33-016-2017-00085-01
MEDIO DE CONTROL : Nulidad y restablecimiento del derecho - Laboral
DEMANDANTE : Rafael Bernardo Loaiza Escobar
DEMANDADO : Departamento del Valle del Cauca

3

Segundo Administrativo de Buga, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 123 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 41 de la Ley 270 de 1996 LEAJ.

V.- CONSIDERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 1437 de 2011, la competencia en asuntos como el aquí debatido se fija de la siguiente manera:

“Artículo 156.Competencia por razón del territorio. *Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:*

(...)

3. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios.

(...)”.

De la revisión de la citada norma se advierte que, para fijar la competencia en materia laboral y por regla general, se tendrá en cuenta el último lugar donde se presentaron o debieron presentarse los servicios.

En el presente asunto, el señor Rafael Bernardo Loaiza Escobar instauró demanda contra el Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Educación, con el objeto de que se declare la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo negativo frente a la falta de respuesta al derecho de petición presentado el 12 de noviembre de 2015.

El juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Cali, mediante auto interlocutorio No. 255 del 24 de abril de 2017 dispuso admitir la demanda contra el Departamento del Valle del Cauca; posteriormente celebró audiencia inicial el 22 de mayo de 2018 en la que no se advirtieron irregularidades procesales ni causales de nulidad, se decidieron las excepciones previas dentro de las que no se invocó la falta de competencia territorial por ninguna de las partes.

Al respecto el Consejo de Estado ha señalado⁷:

II.10 *Sobre la prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y la competencia, el artículo 16 de la Ley 1564, aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 306 de la Ley 1437, establece:*

“Artículo 16.*Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo.*

⁷ C. de E. Sección Primera. Auto interlocutorio de marzo 20 de 2019. Radicación: 11001-03-24-000-2017-00461-00 CP: Nubia Margoth Peña Garzón.



RADICACIÓN : 76001-33-33-016-2017-00085-01
MEDIO DE CONTROL : Nulidad y restablecimiento del derecho - Laboral
DEMANDANTE : Rafael Bernardo Loaiza Escobar
DEMANDADO : Departamento del Valle del Cauca

4

La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservará validez y el proceso se remitirá al juez competente”.

II.11 De lo anterior se desprende que, la falta de competencia por factores distintos del subjetivo o del funcional, es prorrogable en los casos que no sea alegada en tiempo.

II.12 Respecto de la prorrogabilidad de competencia por factores distintos al subjetivo o funcional, la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, mediante providencia de 3 de marzo de 2016⁸, consideró que la competencia para conocer de un proceso que se encuentra en trámite la conserva el juez que adelantó la actuación salvo que se determine la falta de competencia con ocasión del: i) estudio de admisibilidad de la demanda; ii) la interposición de un recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda; o iii) la resolución de una excepción interpuesta por la parte demandada. En efecto, afirmó:

“[...] si el juez en un momento inicial del proceso o las partes en las oportunidades procesales pertinentes no alegan o discuten la falta de competencia por factores diferentes al subjetivo y funcional, a título de ejemplo por los factores de cuantía y territorio, ello no podrá ser constitutivo de causal de nulidad o de remisión a otro funcionario judicial, en virtud del principio de preclusividad en materia de saneamiento de las irregularidades y de prorrogabilidad de la competencia.

Es por esta razón que no puede entenderse que los artículos 158 y 168 del CPACA permiten que en cualquier estado del proceso, posterior a admisión de la demanda y la conformación de la litis procesal, pueda surtirse la remisión del expediente a otro funcionario o despacho judicial que se considere es el competente para asumir el asunto por los factores de competencia distintos al subjetivo o funcional. En estos casos, como se viene de indicar, se conservará la competencia para continuar conociendo del asunto.

En resumen, frente a la falta de competencia tenemos que los momentos oportunos y los efectos de su determinación se pueden sintetizar de la siguiente manera:

Si se determina la falta de competencia al momento de decidir sobre la admisión de la demanda, el juez, la sala o sección lo remitirá al que considere competente para ello, para lo cual se hará uso de lo regulado en el artículo 158 del CPACA.

Si el despacho judicial deja pasar tal oportunidad, la parte demandada o el agente del Ministerio Público podrán, vía recurso de reposición contra el auto admisorio – art. 242 del CPACA-, hacer notar tal falencia y pedir la remisión.

Si esta oportunidad tampoco se aprovechó para tal efecto, podrá proponerse la irregularidad como excepción previa, al tenor del artículo 131 numeral 1º del CGP en armonía con el artículo 175 del CPACA, la cual -de prosperar- dará lugar a la remisión del proceso al competente.

De no procederse conforme lo anterior, es decir, no remitir de oficio el proceso, no recurrirse el auto admisorio o no proponerse la excepción previa, surgen varias situaciones a saber:

Si se trata de falta de competencia por factores diferentes al subjetivo o funcional, la competencia se prorroga y la irregularidad se sana, por tanto no podrá generarse la remisión del proceso a voces del artículo 139 inciso segundo del CGP⁹.

⁸ C. de E. Sección Segunda, Subsección A, auto de marzo 3 de 2016. CP. William Hernández Gómez, núm. único de radicación: 05001333302720140035501.

⁹ Señala este inciso que “El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional”.



RADICACIÓN : 76001-33-33-016-2017-00085-01
MEDIO DE CONTROL : Nulidad y restablecimiento del derecho - Laboral
DEMANDANTE : Rafael Bernardo Loaiza Escobar
DEMANDADO : Departamento del Valle del Cauca

5

Si la falta de competencia se origina por los factores subjetivo o funcional, ello podrá originar que en cualquier momento del proceso este se remita al que se sí lo sea, en la medida en que no podrá ser fallado el asunto por un funcionario incompetente por estos factores, so pena de que se origine la causal de nulidad del fallo (artículos 16 y 138 inciso primero del CGP)¹⁰.

En síntesis, es claro que la “falta de competencia” por factores distintos al subjetivo y funcional, a voces de las nuevas disposiciones procesales, no constituye una causal de nulidad sino que genera una irregularidad que se entiende subsanada si no se utilizaron oportunamente los mecanismos que para tal efecto regulan las normas procesales, tales como la orden de remisión por competencia en forma oficiosa al momento de decidir sobre la admisión, el recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda o la excepción previa de ser procedente [...]” (Destacado del Despacho).

***II.13** Conforme con lo anterior, el Despacho advierte que, si bien es cierto, de la revisión de la demanda y sus anexos, se desprende que los hechos que dieron lugar a la sanción impuesta a la parte demandante ocurrieron en el Peaje de Flandes – Tolima, Báscula Norte, ubicado en dicho municipio, por lo que en principio correspondería conocer del presente proceso al Juzgado Primero Administrativo Oral de Ibagué, por factor territorial de competencia, la realidad es que en el presente caso corresponde conocer del proceso al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá por cuanto operó la prorrogabilidad de la competencia por factores distintos al personal y funcional, establecida en el artículo 16 de la Ley 1564.”*

De acuerdo con lo expuesto, encuentra la Sala que la causa del conflicto presentado por la falta de competencia territorial fue subsanada, toda vez que el juzgado ante el cual se formuló la demanda no advirtió *ab initio* tal situación y procedió a avocar el conocimiento de la misma mediante su admisión, al tiempo que la entidad demandada no alegó como excepción previa la falta de competencia, razón por la cual considera que el proceso debe continuar su trámite en el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Cali que venía tramitándolo.

Por consiguiente y con fundamento en las consideraciones expuestas, se dirimirá el presente conflicto negativo de competencias indicando que el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Cali es la instancia judicial competente para conocer y continuar el trámite del presente proceso.

V. DECISIÓN

En virtud de lo expuesto, la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE

PRIMERO. - DIRÍMASE el conflicto de competencias suscitado entre el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Cali y el Juzgado Segundo Administrativo Oral de

¹⁰ Artículo 16 del CGP, ya citado

“**Artículo 138.** Efectos de la declaración de falta de jurisdicción o competencia y de la nulidad declarada. *Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará. {...}*”

RADICACIÓN : 76001-33-33-016-2017-00085-01
MEDIO DE CONTROL : Nulidad y restablecimiento del derecho - Laboral
DEMANDANTE : Rafael Bernardo Loaiza Escobar
DEMANDADO : Departamento del Valle del Cauca



6

Buga, en el sentido de declarar que el Juzgado Deciséis Administrativo del Circuito de Cali, es el competente para seguir conociendo del presente asunto, conforme a lo referido en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. -Por la Secretaría de la Corporación, **REMÍTASE** la presente demanda y sus anexos al Juzgado Deciséis Administrativo Oral de Calipara su conocimiento, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Providencia discutida y aprobada en Sala Plena de la fecha. Acta No. _____

Los magistrados,



PATRICIA FEUILLET PALOMARES

Salva voto



OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT



OMAR EDGAR BORJA SOTO




OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

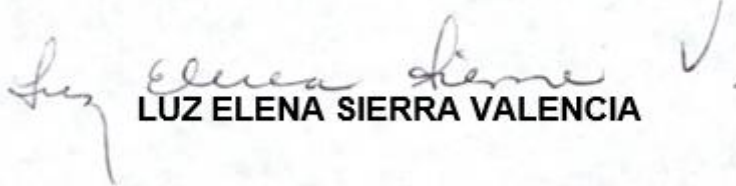
RADICACIÓN : 76001-33-33-016-2017-00085-01
MEDIO DE CONTROL : Nulidad y restablecimiento del derecho - Laboral
DEMANDANTE : Rafael Bernardo Loaiza Escobar
DEMANDADO : Departamento del Valle del Cauca



7



VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ
Magistrado



LUZ ELENA SIERRA VALENCIA



JHON ERIC CHAVES BRAVO



FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ



EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

RADICACIÓN : 76001-33-33-016-2017-00085-01
MEDIO DE CONTROL : Nulidad y restablecimiento del derecho - Laboral
DEMANDANTE : Rafael Bernardo Loaiza Escobar
DEMANDADO : Departamento del Valle del Cauca

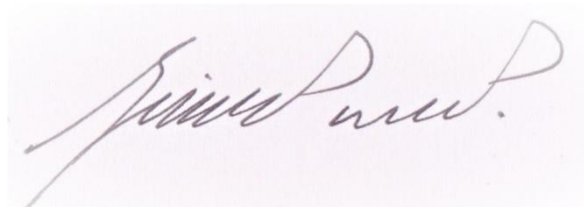


8


ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES
Magistrada
Salva voto


ZORANNY CASTILLO OTALORA
Magistrada


RONALD OTTO CEDEÑO BLUME
Magistrado



GUILLERMO POVEDA PERDOMO
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

RADICADO: 76001-33-33-016-2017-00085-01
ASUNTO: CONFLICTO DE COMPETENCIA (NRD)
DEMANDANTE: RAFAEL BERNARDO LOAIZA ESCOBAR
DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y
FOMAG
PONENTE: ÓSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

SALVAMENTO DE VOTO

Santiago de Cali, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Con el debido respeto por las decisiones que adopta la Sala de manera mayoritaria, a continuación, expondré la razón que motiva mi salvamento de voto.

A mi juicio, la providencia que resuelve el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 16 Administrativo de Cali y el Juzgado Segundo Administrativo de Buga no debió ser emitida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, sino por el magistrado ponente.

En primer lugar, destaco que la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca venía resolviendo los conflictos de competencia en virtud de una interpretación conjunta entre el numeral 4° del artículo 123 de la Ley 1437 de 2011 y la versión original del artículo 158 *ibidem*.

Efectivamente, el numeral 4° del artículo 123 del CPACA establece como una de las funciones de la Sala Plena de los tribunales administrativos la de dirimir los conflictos de competencias que se susciten entre dos jueces administrativos del mismo distrito. Y ello resultaba plenamente compatible con lo dispuesto en la versión original del artículo 158 de la Ley 1437 de 2011, según el cual el conflicto de competencia debía ser decidido «*por el Tribunal Administrativo respectivo*».

Sin embargo, como se sabe, recientemente se publicó la Ley 2080 de 2021, que introdujo modificaciones a la Ley 1437 de 2011. Uno de los preceptos normativos modificados fue, precisamente, el artículo 158.

De conformidad con la modificación introducida por el artículo 33 de la Ley 2080 de 2021, la nueva versión del artículo 158 de la Ley 1437 de 2011 es la siguiente:

Artículo 158. Conflictos de competencia. Los conflictos de competencia entre los tribunales administrativos y entre estos y los jueces administrativos, de diferentes distritos judiciales, serán decididos, de oficio o a petición de parte, por el magistrado ponente del Consejo de Estado conforme al siguiente procedimiento:

Cuando un tribunal o un juez administrativo declaren su incompetencia para conocer de un proceso, por considerar que corresponde a otro tribunal o a un juez administrativo de otro distrito judicial, ordenará remitirlo a este. Si el tribunal o juez que recibe el expediente también se declara incompetente, remitirá el proceso al Consejo de Estado para que decida el conflicto.

Recibido el expediente y efectuado el reparto entre las secciones, según la especialidad, el ponente dispondrá que se dé traslado a las partes por el término común de tres (3) días para que presenten sus alegatos; vencido el traslado, el conflicto se resolverá en un plazo de diez (10) días, mediante auto que ordenará remitir el expediente al competente.

Si el conflicto se presenta entre jueces administrativos de un mismo distrito judicial, este será decidido por el magistrado ponente del tribunal administrativo respectivo, de conformidad con el procedimiento establecido en este artículo.

La falta de competencia no afectará la validez de la actuación cumplida hasta la decisión del conflicto.

Como se ve, se introdujo como cambio sustancial que los conflictos de competencia que se presenten entre jueces administrativos de un mismo distrito serán resueltos *«por el magistrado ponente del tribunal administrativo respectivo»*.

Ahora, soy consciente de que la Ley 2080 de 2021 no modificó el numeral 4° del artículo 123 del CPACA y, por ende, estamos en presencia de una antinomia, pues: por un lado, el numeral 4° del artículo 123 establece que los conflictos de competencia entre jueces de un mismo distrito deben resolverse por la Sala Plena del tribunal administrativo, mientras que, por el otro, el artículo 158 de la misma normativa prevé que esos asuntos deben ser decididos por el magistrado ponente.

Esa antinomia debe solucionarse conforme con los criterios de interpretación y de aplicación de las leyes. Veamos.

- Artículo 5 de la Ley 53 de 1887:

Si en los Códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes:

- 1) La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general;
- 2) Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y se hallen en un mismo Código, preferirá la disposición consignada en artículo posterior; y si estuvieren en diversos Códigos preferirán, por razón de éstos, en el orden siguiente: Civil, de Comercio, Penal. Judicial, Administrativo, Fiscal, de Elecciones, Militar, de Policía, de Fomento, de Minas, de Beneficencia y de Instrucción Pública.

- Artículo 2 de la Ley 153 de 1887: la ley posterior prevalece sobre la anterior.

En ese sentido, debe privilegiarse lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 2080 de 2021, toda vez que: **i)** esa norma es la que regula de manera especial el trámite para resolver los conflictos de competencia y **ii)** se trata de una norma posterior a la prevista en el numeral 4º del artículo 123 del CPACA (tanto en su expedición, como en el articulado del propio código).

Por otra parte, hay quienes invocan que la modificación introducida en ese sentido por la Ley 2080 de 2021 carece de fuerza normativa, por cuanto la competencia reconocida en el numeral 4º del artículo 123 del CPACA es la reproducción del numeral 4º del artículo 41 de la Ley 270 de 1996, que tiene naturaleza de ley estatutaria y que, por ende, no puede ser reformada por una ley ordinaria. A mi juicio, esa disposición tan particular (la de dirimir conflictos de competencia entre juzgados administrativos de un mismo distrito) no está cobijada por la reserva de ley estatutaria que prevé el literal b) del artículo 152 de la Constitución Política y que está instituida a favor de la materia «*administración de justicia*».

Finalmente, sostengo que la regla de decisión introducida por la Ley 2080 de 2021 sí es aplicable al presente asunto, de acuerdo con el régimen de vigencia y transición normativa dispuesto por la propia ley.

El artículo 86 de la ley establece:

Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los

procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se registrarán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones.

La disposición normativa prevé las reglas que definen cuándo se empiezan a aplicar las modificaciones introducidas por la Ley 2080 en relación con los procesos y trámites que se adelantan con la Ley 1437 de 2011. Esas reglas pueden resumirse de la siguiente manera:

- Regla general: las normas rigen a partir de la fecha publicación (25 de enero de 2021).
- Regla de excepción 1: las normas que modifican la competencia de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado se aplicarán a aquellas demandas o asuntos presentados a partir del 25 de enero de 2022 (un año después de la publicación de la ley).
- Regla de excepción 2: las normas que regulan lo relacionado con el dictamen pericial se aplicarán a los procesos y trámites en los cuales no se hayan decretado pruebas.
- Regla de excepción 3: las normas que versen sobre: i) recursos, ii) práctica de pruebas, iii) audiencias, iv) diligencias, v) términos procesales, vi) incidentes y vii) notificaciones no aplicarán respecto de recursos ya interpuestos, práctica de pruebas decretadas, audiencias convocadas, diligencias iniciadas, términos que hubieren comenzado a correr, incidentes en curso y notificaciones que se estén surtiendo.

Estimo que la modificación introducida por el artículo 33 de la Ley 2080 de 2021 no se subsume en alguna de las excepciones previstas en artículo 86 y, por consiguiente, queda sujeta a la regla general: la aplicación a partir del 25 de enero de 2021.

Claramente, esa modificación no versa sobre el dictamen pericial (excepción 2) y tampoco tiene que ver con recursos interpuestos, práctica de pruebas decretadas,

audiencias convocadas, diligencias iniciadas, términos que hayan empezado a correr, incidentes promovidos o notificaciones en curso (excepción 3).

Y, como se expondrá, el artículo 33 de la Ley 2080 de 2021 no hace parte de «*las normas que modifican la competencia de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado*» (excepción 1). Veamos.

Es sabido que uno de los principales objetivos de la Ley 2080 de 2021 era modificar el régimen de competencias existente entre juzgados administrativos, tribunales administrativos y Consejo de Estado. Eso lo hizo, principalmente, a través de las siguientes modificaciones:

Ley 2080 de 2021	Alteración en la Ley 1437 de 2011	Tema
Artículo 23	Creó el artículo 136A	Control inmediato de fallos de responsabilidad fiscal
Artículo 24	Modificó el artículo 149	Competencia del Consejo de Estado en única instancia
Artículo 25	Creó el artículo 149A	Competencia del Consejo de Estado con garantía de doble conformidad
Artículo 26	Modificó el artículo 150	Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia
Artículo 27	Modificó el artículo 151	Competencia de los tribunales administrativos en única instancia
Artículo 28	Modificó el artículo 152	Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia
Artículo 29	Modificó el artículo 154	Competencia de los juzgados administrativos en única instancia
Artículo 30	Modificó el artículo 155	Competencia de los juzgados administrativos en primera instancia
Artículo 31	Modificó el artículo 156	Competencia por razón del territorio
Artículo 33	Modificó el artículo 157	Competencia por razón de la cuantía
Artículo 33	Modificó el artículo 158	Conflictos de competencia

Hay que agregar que el régimen de competencias también se vio alterado por la modificación del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 (artículo 62 de la Ley 2080 de 2021), que versa sobre la procedencia del recurso de apelación. Ello, por cuanto

ahora se admite el recurso de apelación frente a más providencias¹ y ello implica que los superiores funcionales deberán conocer más asuntos de los que venían conociendo.

A mi juicio, la expresión «*las normas que modifican la competencia*», contenida en la excepción 1 del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, se refiere a aquellas que introducen cambios en las reglas que determinan la asignación o conocimiento de los asuntos por parte de las autoridades judiciales. Ese entendimiento encuentra respaldo a partir de las siguientes premisas:

- ¿Por qué se impidió que las normas que modificaran las competencias empezaran a regir de manera inmediata? Porque implicaría un aumento significativo en los asuntos que deberán conocer los juzgados y tribunales administrativos y ello perturbaría drásticamente la capacidad de respuesta del servicio de justicia.
- No en vano el artículo 83 de la Ley 2080 de 2021 dispuso la creación de nuevos despachos y dotación de recursos para su funcionamiento, «*con el fin de lograr la adecuada transición del nuevo régimen de competencias y la implementación de las reformas aprobadas*». Esa nueva planta «*se creará y hará efectiva una vez que el Gobierno Nacional garantice las apropiaciones presupuestales necesarias para ello*».
- En otras palabras, finalidad de la excepción 1 es conceder un plazo prudencial (un año) para que se lleven a cabo las gestiones necesarias que permitan la implementación de la nueva planta de despachos judiciales.

Siendo así, no quedarán cobijadas por la excepción 1 las normas que no inciden en las reglas de asignación o conocimiento de los asuntos a asumir por parte de los juzgados administrativos, los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, pues qué sentido tiene posponer la aplicación de una norma que no afecta la carga de procesos o asuntos.

Esto último es lo que sucede con la modificación del artículo 33 de la Ley 2080 de 2021. Esa norma no afecta la carga de asuntos que conocen los tribunales administrativos, en tanto que la asignación del conocimiento de conflictos de competencia se mantiene inalterable.

El hecho de que, ahora, la providencia que resuelva el conflicto deba ser dictada por el magistrado ponente, y no por la Sala Plena, no es un tema del régimen de competencias (que interesa a la excepción 1 del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021). Y es que resolver el conflicto de competencia mediante providencia de ponente en

¹ Por ejemplo, el rechazo de la reforma de la demanda, el que imprueba la conciliación judicial o extrajudicial, el que deniegue o modifique una medida cautelar. Además, antes había unas providencias que no admitían apelación cuando eran dictadas por los tribunales administrativos, limitación que ahora desapareció.

nada incrementa la carga de asuntos de los tribunales administrativos y, por el contrario, favorece los principios de economía y celeridad.

En conclusión, las providencias que resuelven los conflictos de competencia deben ser proferidas por el magistrado ponente a partir de la publicación de la Ley 2080 de 2021. Por esa razón, el auto que resuelve el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 16 Administrativo de Cali y el Juzgado Segundo Administrativo de Buga debió ser emitido por el magistrado ponente del asunto.

Dejo así expuestas las razones que motivaron que me apartara de la decisión que adoptó la Sala de manera mayoritaria.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'PF' followed by a horizontal stroke.

PATRICIA FEUILLET PALOMARES
Magistrada

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
DESPACHO 11

Santiago de Cali, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Señores Magistrados
SALA PLENA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE
La ciudad.

MEDIO DE CONTROL:	Nulidad y restablecimiento del derecho - Laboral
REFERENCIA:	76001-33-33-016- 2017-00085-01
DEMANDANTE:	Rafael Bernardo Loaiza Escobar.
DEMANDADO:	Departamento del Valle del Cauca
VINCULADO:	Nación – Ministerio de Educación
ASUNTO:	Auto resuelve conflicto de competencia

SALVAMENTO DE VOTO

Con todo el respeto para la decisión mayoritaria, me aparto de ella, porque considero que con la entrada en vigencia de la ley 2080 de 2021, el 26 de enero de este año, la Sala Plena perdió la competencia para resolver los conflictos de competencia, toda vez que es un tema procesal que surte efectos inmediatamente a todos los casos que se rigen por la Ley 1437 de 2011, y este asunto no tiene reserva de ley estatutaria.

Dejo sustentado mi salvamento de voto.

Atentamente,


ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES
Magistrada